

República de Colombia



Rama Judicial

Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento

C.U.I. : 110016500786201200095
N.I. : 191364
Condenado : Pablo Antonio Limas Herrera
Delito : Actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo
Decisión : Fallo incidente de reparación

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020)

Asunto

Procede el despacho a dictar fallo dentro del incidente de reparación promovido por la representante de víctima, en contra de Pablo Antonio Limas Herrera, quien fue condenado como autor de actos sexuales con menor de catorce años agravado.

Hechos

Se estableció en la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que:

«La víctima AYCHP, de 9 años de edad entonces, denunció que dos veces, cuando estaba en casa de su tía, el esposo de ésta, el procesado, la tocó en su cuerpo. La primera vez cuando estaba viendo televisión y el procesado le dijo que se acostara al lado de él, momento en que le metió la mano debajo de la ropa interior y le tocó la vagina, que después le cogió la mano y se la metió entre su ropa interior obligándola a tocarle el pene.

La segunda vez la víctima llegó al inmueble porque estaba asustada por la lluvia, se puso a hacer sus tareas del libro Calculín y el procesado le dijo que se sentara encima de él, oportunidad que aprovechó para tocarle la vagina y decirle que no le fuera a contar a su mamá porque ésta la regañaría.»



Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

Carrera 28 A Número 18 A-67 Piso 5 Bloque C. Email j08pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co: Tel. 4285803

Actuación procesal

En sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), este despacho declaró a Pablo Antonio Limas Herrera, penalmente responsable del punible de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, imponiéndole la pena de ciento sesenta (160) meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y su sustitución por prisión domiciliaria, motivo por el que dispuso librar orden de captura en su contra.

La sentencia fue apelada, y en decisión del diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017), la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con ponencia del magistrado Fernando Adolfo Pareja Reinemer, confirmó la determinación de primer grado.

Comoquiera que se presentó recurso de casación, en determinación del veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, inadmitió la demanda. Fue en esa sede donde la sentencia condenatoria cobró legal ejecutoria.

Actualmente, pesa orden de captura en contra de Pablo Antonio Limas Herrera, emitida por Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

Posteriormente, de manera oficiosa y por conducto de la designación de una profesional del derecho de la Defensoría del Pueblo que asiste los intereses de la víctima, quien para la fecha de los hechos era menor de edad, se programó la audiencia de incidente de reparación integral, la cual se cumplió el día de hoy.

En el decurso de dicha diligencia, luego de verificarse la concurrencia de los presupuestos procesales, la representante de la menor de edad víctima, formuló su pretensión precisando el monto de la reparación a la que aspiraba, señalando que única y exclusivamente demandaba condena por los daños morales subjetivados, los cuales estimó deben fijarse en suma que al menos partiera de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Evidenciado que quien está promoviendo el incidente, es la víctima a través de una profesional del derecho y que no existe elemento de juicio que permita inferir que ya fueron reparados los daños y perjuicios causados por la conducta atentatoria del bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales, este despacho admitió lo pretendido.



Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

Carrera 28 A Número 18 A-67 Piso 5 Bloque C. Email j08pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co: Tel. 4285803

Acto seguido, se corrió traslado a la defensa del sentenciado, quien manifestó que se carecía de medios para establecer la viabilidad de ofrecer cualquier tipo de erogación económica ante la declaratoria de responsabilidad penal, pero reclamó que por la indeterminación de los daños y si quiera, de la ubicación de la víctima, resulta extremadamente alto el petitum de la representante de víctimas.

En la fecha, también se efectuaron la segunda y tercera audiencia, donde la apoderada de las víctimas mantuvo la pretensión planteada y la defensa del sentenciado manifestó no estar interesado en conciliar y no contar con elementos de prueba que aportar.

En la misma ritualidad, se concedió el uso de la palabra a las partes para que expusieran los fundamentos de sus pretensiones.

Fundamento de las pretensiones

Apoderada de la víctima

Demandó condena por los daños morales subjetivados, los cuales deben ser tasados dentro del ámbito discrecional de este funcionario judicial. Advirtió que la existencia del comportamiento delictivo fue decidida en los fallos de primer y segundo grado.

Con fundamento en la obligación de pagar los daños subjetivados procedentes de la lesión, consecuencia de una conducta típica ya determinada, solicitó dar aplicación a los presupuestos legales y constitucionales, y emitir sentencia conforme a lo pedido.

Ministerio Público

Asintió el planteamiento de la Apoderada de Víctimas, en el entendido que quedó demostrada la existencia de los delitos por los que se emitió condena, que generaron un detrimento emocional en la víctima, y comoquiera que la fijación de los perjuicios morales subjetivados reside de manera exclusiva en la judicatura, demandó que se imponga una sanción dentro del ámbito legal que así la determina.



Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

Carrera 28 A Número 18 A-67 Piso 5 Bloque C. Email j08pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co: Tel. 4285803

Defensa

Solicitó exonerar a su asistido de la pretensión elevada por la representación de víctimas, toda vez que no está probada la capacidad económica del condenado y se ha visto un abandono de las víctimas a cualquier pretensión tendiente a su indemnización.

Indicó que si bien es cierto, el delito es fuente de obligaciones como lo adujo la abogada representante de las víctimas, no lo es menos, que le era exigible a su contendora procesal, establecer el daño emocional, y la capacidad del condenado para asumir la erogación que de él se demanda.

Consideraciones

Como punto de partida, es menester traer a colación, que el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, dispone que en firme la sentencia condenatoria y previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público, o de oficio cuando la víctima sea menor de edad, se convocará dentro de los ocho (8) días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, para la cual de ser solicitadas por el incidentante, se ordenarán las citaciones previstas en los artículos 107 y 108 *ibidem*.

Por su parte el artículo 103 *ejusdem*, estipula que al incidentante le corresponde en la primera audiencia fijar su pretensión frente a quien fue condenado, la forma de reparación a la que aspira e indicar las pruebas que hará valer en orden a demostrar su pretensión.

Ahora bien, en el caso *sub examine*, el apoderado de la víctima solicitó al despacho se diera aplicación al artículo 97 del Estatuto de las Penas y en consecuencia de ello, tasara los daños morales subjetivados, por cuanto se trata de conductas que menoscabaron la integridad sexual de una menor de edad, situación que repercutió en su esfera moral y psicológica de manera negativa, sobre lo cual hubo oposición del defensor, pero contrario a su planteamiento, el dolor, la aflicción y el sufrimiento no son eventos que sean susceptibles de demostración, al menos en el trámite que aquí se adelanta.

Sea el momento para anotar en aras de la claridad, que la indemnización integral debe comprender los daños materiales y morales derivados de la conducta punible, siendo la compensación al perjuicio ocasionado.



Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

Carrera 28 A Número 18 A-67 Piso 5 Bloque C. Email j08pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co: Tel. 4285803

La jurisprudencia constitucional y penal, ha dejado sentado que la acción de reparación integral corresponde a una acción de carácter civil que se tramita al término del proceso penal, esto es, una vez se ha determinado la responsabilidad penal del procesado, desde esa óptica, se tiene que toda actuación que se dirija a valorar los daños generados con la conducta sancionada penalmente, debe necesariamente atender los criterios trazados en el artículo 16 de la ley 446 de 1998¹, norma que dispone:

«**VALORACIÓN DE DAÑOS.** Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.»

El canon en cita, exige que la valoración del daño sea integral, por lo tanto, se reitera, ese concepto incluye tanto los perjuicios materiales como los morales, debiéndose incluir en los primeros, como ya fue señalado en precedencia, el daño emergente y el lucro cesante.

Aunado a lo anterior, se cae de su peso, que el trámite del incidente de reparación se homologa al de una acción civil, en donde el incidentante debe fijar de manera concreta la pretensión que persigue le sea reconocida y de esta manera entender que ha sido reparado integralmente².

La fijación del objeto de *litis*, debe darse al comienzo de la audiencia de reparación integral, ya que luego el debate probatorio estará orientado a acreditar la pretensión económica planteada, aspecto sobre el cual tiene la carga probatoria la parte demandante.

En lo que atañe a los perjuicios morales subjetivados, jurisprudencialmente se ha reiterado:

«La armonización de los textos legales citados permite inferir que las exigencias para la demostración y liquidación del daño se predicán del perjuicio material, **dejando al Juez la facultad de fijar los no valorables pecuniariamente que son los morales de carácter subjetivado en razón a que afectan el fuero interno de las víctimas o perjudicados, ya que se traducen en la tristeza, el dolor, la congoja o la aflicción que sienten las personas como consecuencia directa e inmediata del delito,** cuyo único límite está determinado por la ley a partir de factores relacionados con la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado.

De manera que la tasación del daño moral subjetivado escapa a toda regulación por intermedio de perito, sin que surja la obligación de su designación para ese efecto y la necesidad de esperar sus resultados, pues la determinación de su monto es un acto atribuido por ministerio de la ley al Juez de manera privativa, como desde la sentencia del 26 de agosto de 1982 lo ha indicado la Corte³.» (negritas y subrayas extratextuales).

¹ Sentencia del 13 de abril de 2011. Sala de Casación penal. CSJ. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez aprobada mediante acta No. 130.

² Artículo 103 de la ley 906 de 2004.

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, Sentencia del 12 de diciembre de 2005. Rad. 24.011.



Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

Carrera 28 A Número 18 A-67 Piso 5 Bloque C. Email j08pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co: Tel. 4285803

No está de más recordar, que el incidentante como titular de la acción indemnizatoria puede renunciar a la reparación de los daños materiales, bien porque carezca de interés en este tipo de reparación o porque no cuente con elementos de prueba que le permitan demostrar la afectación de índole material, como sucedió en este asunto.

Adentrándonos en la tasación de los perjuicios morales subjetivados, ésta por mandamiento legal le corresponde a la judicatura, quien para el efecto debe tener en cuenta la naturaleza de la conducta punible y el daño causado, no así la demostración concreta de un daño, como lo sostiene el abogado defensor, pues ello es del ámbito exclusivo de los perjuicios de orden material.

En este orden de ideas, en el asunto *sub judice*, se tiene que evidentemente, la conducta punible desplegada por el sentenciado atentó contra la libertad, integridad y formación sexual de la entonces menor de edad A.Y.CH.P., quien para la fecha de los hechos, contaba con nueve (9) años de edad, cuyos derechos sin duda, prevalecen sobre los de los demás, en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Carta Política, dado que por tratarse de una niña, se encontraba en un estado de mayor vulnerabilidad, por ende es sujeto de especial protección no solo del Estado sino de toda la sociedad.

Efectivamente, el despacho no puede pasar inadvertidas las huellas de carácter psicológico que tales agresiones pudieron haber dejado en la entonces menor, pues las referencias fácticas indican que fue sometida a vejámenes sexuales, que sin duda representaron una vulneración concreta en su esfera moral.

Aflicción psicológica que debe ser reparada a título de perjuicio moral subjetivado por parte del sentenciado Pablo Antonio Limas Herrera, en cuantía equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Una vez ejecutoriado el fallo de este trámite incidental, el demandado cuenta con un término de seis (6) meses para dar cumplimiento al pago aquí ordenado.

Igualmente, se dispone incorporar esta decisión a la sentencia de condena proferida por este Juzgado el treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), confirmada el diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y respecto de la cual, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación el veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), atendiendo lo normado en el artículo 105 del Código de Procedimiento Penal en armonía con el artículo 447 de la misma codificación.



Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

Carrera 28 A Número 18 A-67 Piso 5 Bloque C. Email j08pccbt@cendoj.ramajudicial.gov.co: Tel. 4285803

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., *administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley*,

Resuelve

Primero: Condenar a Pablo Antonio Limas Herrera de condiciones civiles conocidas en autos, al pago de la suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales subjetivados para A.Y.CH.P., en su calidad de víctima dentro del presente proceso; sanción que deberá ser cancelada dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo incidental.

Segundo: Declarar que la presente providencia, debe ser incorporada a la sentencia condenatoria proferida por este Juzgado el treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), confirmada el diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y respecto de la cual, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación el veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), atendiendo lo normado en el artículo 105 del Código de Procedimiento Penal en armonía con el artículo 447 de la misma codificación.

Notifíquese y cúmplase

Carlos Eduardo Velásquez Rodríguez
Juez

C.E.V.R.

Por las actuales condiciones de salubridad, este documento se publica sin firma, y estará en el sitio web de la Rama Judicial, su original estará a disposición de las partes una vez cesen las condiciones especiales que afectan el territorio nacional.